



JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL

Yopal, Casanare, catorce (14) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Proceso : EJECUTIVO
Referencia : 850013103002-2022-00188-01 radicación inicial 2020-015
Demandante : INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandado : LUIS ALFONSO CACHAY

I. ASUNTO

Procede el despacho a decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Nunchia – Casanare y Tercero Civil Municipal de Yopal – Casanare, para continuar conociendo la ejecución promovida por el Instituto Financiero De Casanare contra el señor Luis Alfonso Cachay.

II. ANTECEDENTES

-Para ante el primer despacho en mención, la promotora presentó demanda ejecutiva el 14 de septiembre de 2020, y para el 17 del mismo mes y año se libró mandamiento de pago, que fue notificado sin que el demandado incoara excepciones, razón por la cual el despacho el 1º de septiembre de 2021, profirió orden de seguir adelante con la ejecución conforme el artículo 440 del CGP.

Seguidamente en auto de fecha 7 de marzo de 2022, el juzgado realiza un control de legalidad en el que resuelve abstenerse de seguir conociendo del presente proceso y ordena remitir a los Juzgados Civiles Municipales de esta localidad, manifestando, asumirá la tesis consistente en que la entidad demandada tiene la calidad de una entidad pública que se rige por el Régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado y conforme el numeral 10º del artículo 28 del C.G.P quien tiene competencia para conocer del presente proceso es el juez del lugar del domicilio de la entidad descentralizada, misma que prevalece frente al criterio general de competencia territorial.

Continúa argumentando el fallador que en principio se asumió una postura de la Corte, en la que se predicaba la renuncia tacita de la entidad al factor de competencia que le permitía presentar las demandas en su domicilio, sin embargo, vistos los nuevos pronunciamientos de la Corte suprema de Justicia que recalcan la competencia subjetiva basada en la calidad de la entidad pública que hace parte del proceso es improrrogable, se acoge a ellos.

Seguidamente, expone las disposiciones del artículo 16, numeral 10 del artículo 28 y 29 del Código General Del Proceso y el artículo 68 de la Ley 498 de 1998, junto a pronunciamientos de La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Distrito judicial de Yopal, los cuales adoptan la postura de la improrrogabilidad de la competencia por el factor subjetivo.

-Por su parte el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, a quien por reparto le correspondió el presente proceso, en auto de fecha 21 de abril de 2022, no avocó conocimiento y en su lugar propuso conflicto negativo de competencia, exponiendo diferentes fundamentos de su planteamiento, el primero de ellos consistente en la oportunidad procesal en que el Juzgado de Nunchia decidió hacer la evaluación de la competencia, resultando ser extemporáneo, en el entendido que la competencia se prorrogó, agrega, tampoco medió solicitud de parte, único legitimado para ello como lo dispone la

jurisprudencia, sino que se trató de una decisión de oficio, para lo cual cita decisiones de la Corte para el año 2018.

Adicionalmente señala, que, si se aceptara el hecho de apartarse del proceso por falta de competencia, el expediente tendría que devolverse, por cuanto no se nulito la sentencia que se profirió conforme lo dispone el artículo 16 y 138 del CGP, como quiera que existe auto de seguir adelante con la ejecución.

Finalmente, refiere si bien es cierto que la competencia derivada de la naturaleza pública de la entidad demandante debe ser ejercida de manera privativa por el juez de su domicilio, no es menos cierto, el carácter renunciable de tal fuero, para lo cual extrae apartes de jurisprudencia y refiere es un asunto que no fue estudiado por su homólogo.

III. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico:

Determinar cuál es la autoridad judicial competente para continuar con el conocimiento del proceso ejecutivo singular adelantado por el Instituto Financiero de Casanare en contra de Luis Alfonso Cachay.

2. Competencia:

Este despacho es competente para conocer del asunto por ser el superior funcional de los despachos en divergencia frente a la continuidad en el conocimiento del asunto, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, y el artículo 139 del CGP.

3. De la resolución del problema jurídico.

Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces del territorio nacional, para su ejercicio es necesario distribuir los asuntos entre las distintas autoridades judiciales, conforme las normas de orden público, denominadas reglas de competencia.

En tratándose de asuntos sometidos a esta especialidad, la distribución se realiza mediante la aplicación de diversos **factores**, como el **subjetivo**, **objetivo** que determina –*naturaleza y cuantía*- no siendo suficientes para adjudicar competencia, por lo que se apoya en factor territorial según los fueros – *personal, real y contractual*-, **funcional y de conexidad**.

El que hoy nos ocupa la atención es el fuero subjetivo, que responde a la calidad de las partes en litigio, que para el derecho privado, se reconocen dos fueros personales que son, el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno, sin perjuicio del descrito en el numeral 10 del artículo 28 del CGP que determina la competencia territorial, en el que se señala *“En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad”*, en otras palabras se establece un fuero subjetivo dentro del factor territorial.

Ahora bien, atendiendo dicho precepto legal, preciso es abordar el asunto de la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y competencia contenido en el artículo 16 ibidem, que describe *“la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables”* misma disposición legal que permite su declaratoria de oficio o a petición de parte.

A esto le sigue, la posibilidad que tienen las partes de renunciar a los fueros preestablecidos en la norma, asunto que junto a los descritos en precedencia ha quedado zanjada con decisión de la Corte Suprema de Justicia, al unificar las diferentes tesis adoptados, en el auto de fecha 24 de enero de 2020, que disponen:

“Es decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuestión sumamente importante, cuál es la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis¹. En efecto, si el legislador optó por establecer el carácter de improrrogable a los citados foros de distribución, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determinó que, aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicción y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagró fue una excepción al principio de la perpetuatio jurisdictionis.

Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13 , C.G.P.) , surge un a última consecuencia , no menos importante , el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10° del artículo 28 del citado estatuto .

En tal sentido, no puede afirmarse que si un órgano, institución o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, está renunciando automáticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es , el de su domicilio; de ahí que, no puede renunciar a ella.

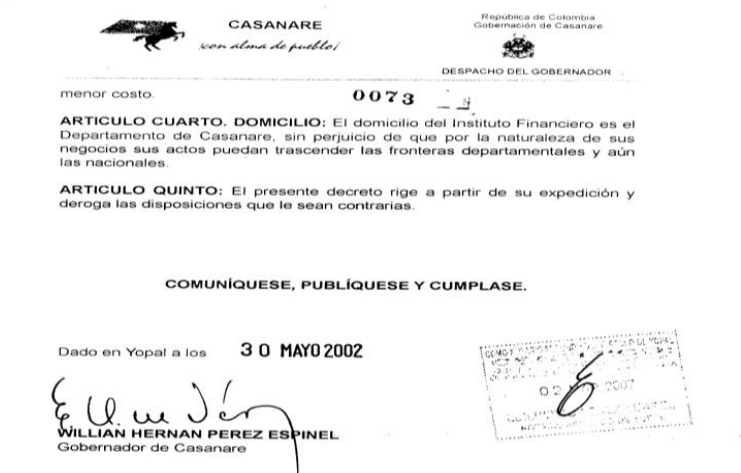
*Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que: "No puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad pública, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequívocamente, establece de **forma imperativa** una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, además, por estar inserta en un canon de orden público. Recuérdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, (l)as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización legal" (CS J AC4273-2018).²*

Decantado someramente el ordenamiento jurídico aplicable al asunto bajo estudio, pasa el despacho a realizar el análisis del caso, concretando de entrada que el demandante Instituto Financiero De Casanare es una entidad pública, conforme su propia estructura, reglamento organizacional, naturaleza jurídica y el objeto de sus actividades, empresa comercial del Departamento de Casanare con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, vinculada a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Económico, según el Decreto 0073 del 30 de mayo de 2022 de creación o modificación del FONDESCA.

¹ El cual alude a que una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio.

² Ver también, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-201, AC-1082-2019 Y AC2844-2018, entre otros.

Constituyéndose así en una entidad descentralizada por servicios, a la que se le aplica en fuero subjetivo, previsto en el numeral 10 del artículo 28, que dispone, el conocimiento del juez será en forma privativa el del domicilio de la entidad, domicilio que según el Decreto 0073 del 30 de mayo de 2022, es el Departamento de Casanare, sin poder acudir a cualquier otro tipo de análisis, pues la misma entidad territorial que la creó así lo determinó.



Hecho que ha sido entendido de tal manera por la Corte suprema de Justicia para el 2022 cuando resolvió un conflicto de competencia en el que una de las partes era el Instituto Financiero de Casanare, al señalar “A su vez, el Instituto Financiero del Casanare «IFC», es una empresa comercial y de gestión económica del departamento de Casanare, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico, con domicilio en el departamento de Casanare, de acuerdo con el artículo 1 y 4 del decreto 0073 de 2002.”³

Así las cosas, en ese orden de ideas, ningún Municipio de Casanare podría declarar la falta de jurisdicción o competencia en razón al domicilio de la entidad, ahora bien, así resulta claro que el trámite del proceso ejecutivo del epígrafe, adelantado por el IFC en contra de Luis Alfonso Cachay, debe seguir siendo tramitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunchía.

Lo anterior, por no ser de recibo la argumentación consistente en que el domicilio de la entidad demandante es el Municipio de Yopal, con fundamento en lo dicho en el artículo 105 (sic) del Decreto 107 del 27 de julio del 1992, en tanto, ello se refería al extinto Fondo para el Desarrollo de Casanare, que nada tiene que ver con el IFC, por existir un nuevo instrumento de creación, en el que se fijaron nuevos parámetros entre éstos, el domicilio de la entidad.

Así las cosas, como los argumentos del Juez que declaró su falta de competencia para continuar conociendo el proceso en referencia carecen de razón conforme se expuso, se devolverán las actuaciones para que siga adelantando el proceso, sin que sea necesario acudir a los restantes planteamientos presentados por el Juez Tercero Civil Municipal de Yopal.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal.

III. RESUELVE

³ AC1342-2022 Radicación N.º 11001-02-03-000-2022-00549-00 Bogotá D.C., primero (1) de abril de dos mil veintidós (2022).

PRIMERO. DECLARAR que el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunchia, es el competente para continuar conociendo del proceso ejecutivo instaurado por el Instituto Financiero de Casanare contra Luis Alfonso Cachay.

SEGUNDO. REMITIR el expediente al citado despacho judicial para que obre de conformidad.

TERCERO. TERCERO: Comuníquese esta decisión a los Despachos Judiciales vinculadas al conflicto suscitado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER ARTURO ROCHA VASQUEZ

Juez

Firmado Por:

Javier Arturo Rocha Vasquez

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 002

Yopal - Casanare

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **90dc90ec7d5374c141b44ed42c9a5c4b77b0c559b3c268ec1f002609f6e20b77**

Documento generado en 14/10/2022 04:07:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>